



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Demandante: BEATRIZ ELENA GARCÍA TORO
Demandados: RICARDO LEÓN MONTOYA SALGADO y COLPENSIONES
Radicado: 05001 31 05 017 2019 00267 01
Sentencia: S-213

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a dar trámite al grado jurisdiccional de Consulta concedido a favor de la demandante, con ocasión de la sentencia absolutoria de primera instancia proferida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín el día 9 de noviembre de 2021.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES:

BEATRIZ ELENA GARCÍA TORO llamó a juicio al señor RICARDO LEÓN MONTOYA SALGADO y a la ACP COLPENSIONES, para que una vez se declare la existencia de una relación laboral con el primero entre el 17 de noviembre de 2013 y el 22 de febrero de 2017, sea condenado a

realizar el pago de los aportes a pensión de los tiempos no cotizados mediante cálculo actuarial, el cual deberá ser recibido por COLPENSIONES y reflejado en la historia laboral. Adicionalmente, pretende el reconocimiento del auxilio de transporte causado durante toda la relación laboral, las prestaciones sociales y vacaciones, las indemnizaciones por mora contenidas en los artículos 65 del C.S.T. y 99 de la Ley 50 de 1990, la indexación y las costas del proceso.

HECHOS:

Expone como fundamento de sus peticiones, que prestó sus servicios al señor RICARDO LEÓN MONTOYA SALGADO desde el 17 de noviembre de 2013 en el establecimiento de comercio de su propiedad denominado "SABROSAS PAPA Y MANDINGAS"; que el objeto social principal de esa unidad empresarial era la venta de comidas rápidas; que fue contratada para desempeñar la labor de freidora de papas en un horario de lunes a jueves de 4:30pm a 12:00am y de viernes a domingo de 4:30pm a 2:00am, con un día de descanso a la semana; que el empleador le manifestaba que la relación contractual se regía por un contrato de prestación de servicios, lo que no es cierto al haber existido subordinación, prestación personal de un servicio, así como dependencia técnica y administrativa; que recibía una remuneración de \$25.000 diarios que equivalen a \$750.000 mensuales; que nunca le pagaron auxilio de transporte, horas extras y prestaciones sociales, además de que tampoco fue afiliada a seguridad social; y que la relación laboral terminó el 22 de febrero de 2017 por renuncia del trabajador motivada en los malos tratos recibidos.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

Al contestar, COLPENSIONES dice que le es impropio oponerse o allanarse a las pretensiones de la demanda relacionadas con la existencia de una relación laboral, advirtiendo que, si llegan a

prosperar, las cotizaciones al Sistema General de Pensiones deben ser reconocidas teniendo en cuenta los intereses moratorios que se hayan podido generar. Con respecto a los hechos, señala de manera general que no le constan por tratarse de situaciones ajenas a su conocimiento que deben ser probadas en el curso del proceso. No propuso excepciones de fondo.

El señor RICARDO LEÓN MONTOYA SALGADO, representado por curador ad litem, se opuso a las pretensiones de la demanda como quiera que no se ha establecido la existencia de una relación laboral entre las partes y mucho menos los extremos en que pudo haber existido. Con respecto a los hechos, señala frente a todos ellos que no le constan y que se atiene a lo que se logre demostrar en el proceso. Como excepciones de fondo propuso inexistencia de las obligaciones demandadas y prescripción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 9 de noviembre de 2021, el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, ABSOLVIÓ a las demandadas de todas las pretensiones formuladas en su contra por la señora BEATRIZ ELENA GARCÍA TORO, frente a quien se abstuvo de imponer costas.

Conoce la Sala del asunto por **Consulta** a favor de la demandante.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

Dentro del término concedido para alegar de conclusión, los apoderados de las partes no realizaron manifestación alguna.

CONSIDERACIONES:

Según viene de verse, a través de la presente acción judicial la Sra. BEATRIZ ELENA GARCÍA TORO pretende se declare la existencia de

una relación laboral con el señor RICARDO LEÓN MONTOYA SALGADO entre el 17 de noviembre de 2013 y el 22 de febrero de 2017, con el consecuente pago de prestaciones sociales, vacaciones, auxilio de transporte, indemnizaciones por mora, así como el pago del cálculo actuarial con destino a COLPENSIONES por el valor de los aportes al Sistema General de Pensiones dejados de realizar.

Atendiendo al grado jurisdiccional de Consulta en el que se conoce del proceso y luego de la revisión de la legalidad del fallo cuya decisión fue la de negar todas las pretensiones formuladas por la demandante, la Sala encuentra que lo resuelto en primera instancia debe ser confirmado en tanto la parte actora no cumplió con la carga probatoria que le correspondía con respecto a detalles indispensables para proferir una condena como sería, al menos, las fechas de inicio y terminación durante las cuales se desarrolló la relación laboral.

La señora GARCÍA TORO dice haber laborado como freidora de papas en el establecimiento de comercio denominado SABROSAS PAPA Y MANDINGAS en el barrio Niquía del Municipio de Bello (Ant.), de propiedad del demandado RICARDO LEÓN MONTOYA SALGADO, mediante la prestación personal de sus servicios y atendiendo sus órdenes directas, además de que utilizaba todas las herramientas de trabajo que aquel le proporcionaba para el producto final de venta de comidas rápidas y que lo hacía de lunes a jueves de cuatro y treinta de la tarde hasta las doce de la media noche y los fines de semana hasta las dos de la mañana, con un día de descanso semanal. Sobre esta base construye sus pretensiones aduciendo que no le fueron reconocidos sus derechos laborales.

Planteado así el pleito, debe recordarse que, en el proceso judicial, corresponde a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que fundamentan sus pretensiones, o sus excepciones, según sea el caso, de acuerdo con los lineamientos normativos que en materia procesal gobiernan el debate probatorio, esto es, el artículo 167 del

Código General del Proceso *"Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen"*.

Es decir, incumbía a la demandante la carga de la prueba de sus aseveraciones de manera que pueda el juez arribar a la conclusión certera acerca de la existencia del contrato de trabajo, para lo cual sería suficiente la demostración, al menos, de la relación laboral que se caracteriza por la prestación personal de un servicio, para que en virtud de lo normado en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, se presuma la existencia del nexo laboral subordinado, trasladándose la carga de desvirtuar la presunción a la parte opositora.

Carga probatoria que de todas maneras no se agota en la demostración de la relación laboral –o prestación personal del servicio – sino que además se requiere la acreditación de otros elementos no menos determinantes para el buen suceso de lo pretendido, verbi gracia, los extremos temporales en que tal relación se presentó, o bien la forma en que terminó el vínculo laboral, dado que sin ellos no es viable deducir, en concreto, derechos laborales como los que aquí se reclaman.

En el presente caso, la funcionaria de primer grado concluyó, que, aunque se aceptara que la demandante pudo haber acreditado la prestación personal de un servicio, supuesto del cual se partirá, no lograron demostrar los extremos temporales de la relación laboral, conclusión que comparte esta Sala de decisión, entre otras razones, por la falta de claridad y coherencia de los testigos ya que sus contradicciones en torno al tema le restan toda credibilidad y no permiten, siquiera por aproximación, establecer esas fechas de inicio y terminación del contrato.

Lo primero que se debe advertir, es que ciertamente la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha indicado en múltiples providencias, que, si no se conocen con exactitud los extremos temporales, podrían inferirse de forma aproximada, pero razonable, cuando se tenga la certeza de la prestación del servicio en un determinado periodo de tiempo.

Así lo ha indicado en sentencias como las citadas en primera instancia y en otras como la del 22 de marzo de 2006 Rad. 25580, reiterada en decisiones del 28 de abril de 2009 Rad. 33849, 6 de marzo de 2012 Rad. 42167 y del 4 de noviembre de 2013, rad. 37865, en todas ellas acudiendo a reiterada jurisprudencia sentada desde los tiempos del extinto Tribunal Supremo del Trabajo. En la última de las mencionadas, por ejemplo, reiterada en la SL 6621 de 2017 y en la SL 439 de 2021, se dijo:

*“La jurisprudencia adoctrinada de esa Sala ha fijado el criterio según el cual, en estos casos, en que no se conocen con exactitud los extremos temporales, se podrían dar por establecidos en forma aproximada, **cuando se tenga seguridad sobre la prestación de un servicio en un determinado período**, para así poder calcular los derechos laborales o sociales que le correspondan al trabajador demandante. Al respecto, en sentencia de la CSJ Laboral del 22 de marzo de 2006 Rad. 25580, reiterada en decisiones del 28 de abril de 2009 Rad. 33849 y 6 de marzo de 2012 Rad. 42167, se dijo:*

“(...) Aunque no se encuentra precisada con exactitud la vigencia del contrato de trabajo, esta podría ser establecida en forma aproximada acudiendo a reiterada jurisprudencia sentada desde los tiempos del extinto Tribunal Supremo del Trabajo, según la cual cuando no se puedan dar por probadas las fechas precisas de inicio y terminación de la relación laboral, pero se tenga seguridad de acuerdo con los medios probatorios allegados sobre la prestación del servicio en un periodo de tiempo que a pesar de no concordar exactamente con la realidad da certeza de que en ese lapso

ella se dio, habrá de tomarse como referente para el cálculo de los derechos laborales del trabajador.

En sentencia de 27 de enero de 1954, precisó el Tribunal Supremo:

<Si bien es cierto que la jurisprudencia de este Tribunal ha sido constante en el sentido de que cuando quien debe demostrar el tiempo de servicio, y el salario devengado, no lo hace, no hay posibilidad legal para condenar al pago de prestaciones, salarios o indemnizaciones, es también evidente que cuando de las pruebas traídas a juicio se puede establecer sin lugar a dudas un término racionalmente aproximado durante el cual el trabajador haya servido, y existan por otra parte datos que permitan establecer la cuantía del salario devengado, es deber del juzgador desentrañar de esos elementos los hechos que permitan dar al trabajador la protección que las leyes sociales le garantizan>.

En el sub examine se conocen el año y el mes, pero no el día en que empezó y terminó la relación; de acuerdo con el criterio anterior, habría de entenderse como probado el extremo inicial del vínculo laboral a partir del último día de noviembre del año 2000, y como extremo final, el señalado por el actor en la demanda, es decir, el 23 de diciembre de ese año, por estar dentro del espacio temporal que quedó probado. Así, se habría establecido que el contrato tuvo vigencia entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2000" (resalta la Sala).

En tales condiciones, si se trata de la fecha de ingreso, teniendo únicamente como información el año, se podría dar por probado como data de iniciación de laborales el último día del último mes del año, pues se tendría la convicción que por lo menos ese día lo trabajó. Empero frente al extremo final, siguiendo las mismas directrices, sería el primer día del primer mes, pues por lo menos un día de esa anualidad pudo haberlo laborado."

Pero es precisamente ese el fundamento que sirve en este caso para negar lo pretendido dado que racionalmente no es posible inferir esas

fechas de inicio y terminación de la relación laboral. Es decir, en este caso existen serias dudas de lo relatado por los testigos ya que sus afirmaciones no generan plena certeza por la ambigüedad, inexactitud e imprecisión de su relato y por las contradicciones en que incurren con relación a lo dicho entre ellos y con respecto a lo indicado por la demandante en su interrogatorio de parte.

La prueba más importante que en este caso se pretende hacer valer es la testimonial, ya que la documental poco o nada aporta a los intereses de la demanda y del interrogatorio de parte ningún elemento a su favor es posible extraer, aunque tampoco exista prueba por confesión en que estricto sentido beneficie al demandado.

La documental se reduce al acta de no conciliación N° 5203 de 2017 de la Dirección Territorial de Antioquia del Ministerio del Trabajo sin que en ella existan elementos que puedan servir como fundamento para determinar las fechas de inicio o terminación de la relación laboral.

De otro lado, se aportó un Certificado Mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia del que se infiere que el señor RICARDO LEÓN MONTOYA SALGADO fue propietario de un establecimiento de comercio denominado "*SABROSAS PAPAS*", el cual fue constituido el 23 de febrero de 2009 pero cuya matrícula fue cancelada desde el 11 de julio de 2014.

En lo que a los testigos se refiere, se trata de las declaraciones de las señoras MARÍA VICTORIA VANEGAS CASTRO y ALEXANDRA MARÍA CANO RÚA de las que se puede inferir que la demandante laboró en alguna época al servicio del señor RICARDO LEÓN MONTOYA SALGADO en un establecimiento de comercio de comidas rápidas en el Municipio de Bello, aunque no se sabe con certeza si siempre desempeñó sus funciones en el mismo sitio o si lo hacía unos días en una de las sedes y otros días en la otra; que recibía una remuneración

diaria de \$25.000 de lunes a jueves y de \$30.000 los fines de semana; que no les pagaban prestaciones sociales, ni estaban afiliadas a seguridad social; que laboraban de lunes a jueves de 4:00pm a 12:00 media noche y fines de semana de 4:30pm a 2:00am, portando un uniforme distintivo del lugar; y que las órdenes, determinación de horarios, herramientas de trabajo y demás, eran proporcionadas por el señor RICARDO LEÓN

Se confirma entonces que la prestación personal del servicio, nota característica de la relación laboral a partir de la cual se presume la existencia el contrato de trabajo, se halla en este caso plenamente demostrada en los términos del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo según el cual *"Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo"*. Sin embargo, su idoneidad como testigos desaparece cuando entran a establecer las fechas de vinculación y tanto la de inicio como de terminación del contrato.

Y todo parte de la misma inseguridad que en tal sentido refiere la propia demandante, quien no tiene claridad acerca de su fecha de ingreso a laborar al servicio del demandado, indicando que cree que comenzó en 2013, pero de lo que no está segura.

La señora MARÍA VICTORIA VANEGAS CASTRO, dijo, refiriéndose al demandado, que *"Yo trabajé en el 2016 con él, fecha exacta no tengo, yo sé que trabajé como de principio de año, como de 5 a 6 meses más o menos con él"*, mientras que sobre el tiempo de duración de la vinculación de la demandante informa que: *"fecha exacta exacta no sé, pero por ahí 3 años o más"*, indicando frente al momento de inicio de la vinculación *"... no sé, sinceramente no"*.

De otro lado, en cuanto a la fecha final, señaló que *"ella dejó de trabajar, yo me salí y ella se salió al año siguiente, por ahí en el 2015 se salió ella más o menos... sinceramente no sé, porque cuando yo me*

retiré de allá me fui a buscar mi trabajo por otra parte y nos veíamos más bien poco...". En ese mismo aspecto dice más adelante que "cuando se retiró, ella estuvo un tiempo buscando trabajo y después empezó a trabajar en LA PAISANA", pero que no sabe cuánto tiempo pasó sin trabajo porque "ya nos veíamos poquito... estuvo desempleada, yo creo que por ahí un añito más o algo así, pero como le digo no nos veíamos ya casi."

La inexactitud en las respuestas, la inseguridad en sus afirmaciones y la falta de claridad en su relato, son elementos que impiden a la Sala obtener una fecha siquiera aproximada del momento en que pudo haber iniciado o terminado la relación laboral entre las partes. Empezando porque su declaración comienza indicando expresamente no saber la fecha en que la demandante pudo haber iniciado la vinculación laboral, mientras que, respecto de la terminación, parte de meras suposiciones y se contradice cuando afirma haber estado en 2016 pero que la demandante se salió un año después que ella, en el año 2015, lo que no tiene sentido alguno.

Situación similar ocurre con ALEXANDRA MARÍA CANO RUA, quien dijo haber laborado para el señor RICARDO LEÓN por espacio de 3 o 4 meses en el año 2016, lo que de entrada reduce a un pequeño margen el tiempo durante el cual pudo haber compartido con la demandante y tener así un conocimiento directo de la situación. Fuera de eso, dijo saber que la demandante trabajó en MANDINGAS con el señor RICARDO pero que *"la fecha de ella cuando entró no sé bien exacto..."*, sin que tampoco con esta testigo se pueda conocer ese importante elemento de la relación laboral. Frente al momento de finalización, dijo, también con poca claridad, que *"... ella terminó como en el 2017 o algo así, no tengo bien la fecha"*.

Si lo anterior no fuera suficiente para concluir que las declaraciones de ambas testigos no resultan conducentes y útiles para el proceso, existe una serie de contradicciones que llevan a descartar cualquier

posibilidad de éxito de las pretensiones que se invocan con la demanda.

- La primera testigo dice que había dos sedes, unos días trabajaba en una y otros en otra, pero que la demandante siempre estuvo en la que está ubicada en la diagonal 55. Sin embargo, la segunda testigo, quien también señaló que existen dos sedes, explicó al despacho que *“a uno lo rotaban, muchas veces en la 55 o lo mandaban al parque, a todas nos rotaban, a la demandante también”*.
- La primera testigo no pudo haber compartido todo el tiempo en el mismo sitio con la demandante, no solo por las rotaciones que hacían ya que a ella normalmente la mandaban los fines de semana para una sede distinta a la demandante, sino porque también su día de descanso en la semana era distinto.
- Tanto la demandante como la señora MARÍA VICTORIA VANEGAS CASTRO dijeron que el vínculo laboral de la primera se mantuvo por espacio de 3 años y medio aproximadamente, pero la testigo ALEXANDRA MARÍA CANO RÚA dijo otra cosa, dijo que duró *“... por ahí unos 5 años”*. Testigo que además dijo que sabe lo que está relatando porque *“... yo veía que pasaba todos los días y estuvo mucho tiempo con el uniforme de MANDINGAS.”*, aunque más adelante se supo que durante un tiempo tuvo su propio trabajo en otro lugar desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, de modo que no era posible hacer las dos cosas al mismo tiempo.

Con lo anterior encuentra esta Colegiatura que no se encuentran acreditados los extremos laborales de la relación laboral invocada, lo cual es suficiente para impartir confirmación a la sentencia que por virtud del grado jurisdiccional de consulta se revisa.

Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín el día 9 de noviembre de 2021.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **82fc780c20589958019119e693d4bd564c63f75173ff6926bb3450a295ff0c12**

Documento generado en 18/08/2022 03:07:28 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>